

C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Por sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-2439-2020, se rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada; se acogió la excepción de prescripción opuesta por la demandada (respecto del feriado) y se acogió parcialmente la demanda interpuesta por don Esteban Felipe Padilla Briones en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, declarándose que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, con una remuneración mensual de \$ 900.000; que el despido del demandante es indebido y que no ha podido producir sus efectos, por lo que condena a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo; la indemnización por años de servicios; el incremento del 50% establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo; las cotizaciones previsionales, de salud y por cesantía impagas de todo el período trabajado de acuerdo con las remuneraciones indicadas en el considerando noveno; las remuneraciones desde la fecha de la separación del trabajador hasta la convalidación del despido; feriado legal y feriado proporcional; sin costas.

Contra dicha sentencia tanto la parte demandante como la parte demandada dedujeron recurso de nulidad.

La demandante, hizo valer -como única causal- la del artículo 477, segunda hipótesis, del Código del Trabajo, infracción de ley, solicitando que se anule parcialmente la sentencia impugnada y, acto seguido, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que mantenga lo decidido respecto de la declaración de relación laboral, el despido injustificado, los recargos legales, las cotizaciones de seguridad social, los intereses y reajustes legales, y la sanción de nulidad del despido; y agregando la condena en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba a la compensación íntegra del feriado legal y proporcional demandado, dando así lugar a toda la demanda con expresa condenación en costas.

La demandada hizo valer -tres causales subsidiarias- siendo la primera, la del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo; la segunda es la del artículo 478 letra b) del mismo Código y la tercera es la del artículo 477, segunda hipótesis, del mismo cuerpo legal, solicitando: a) la



invalidación del fallo en lo que dice relación al rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por su parte y dictando la sentencia que declare la incompetencia del mismo para conocer del asunto sometido a su decisión; b) en subsidio, la invalidación del fallo en cuanto declara la existencia de una relación laboral con el demandante, y condena a su parte al pago de nulidad del despido, indemnizaciones, feriado legal y cotizaciones previsionales y negar a lugar a la misma declarando la existencia de una infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba y por ende que el vínculo que unió a las partes, fue un vínculo de prestación de servicios regido por el artículo 4° de la ley N° 18.883, esto es, a honorarios sin sujeción alguna a la normativa del Código del Trabajo; c) en subsidio de todas las demás causales declarar que se incurrió en infracción de ley respecto del artículo 162 incisos 5° y 7° en relación al artículo 19 del Código Civil, dejar sin efecto la sentencia en lo relativo a este punto y declarar que no procede el pago de las remuneraciones por nulidad del despido.

Declarados admisibles los dos recursos, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día uno de julio último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandante:

Primero: Que la causal invocada por la parte demandante es la que establece el artículo 477, segunda hipótesis, del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, la que recae en infracción de los artículos 67, 73 y 510 inciso 1° del Código del Trabajo, en lo relativo a la prescripción del feriado legal.

Argumenta que el tribunal declaró la relación laboral entre el demandante y la Ilustre Municipalidad de Huechuraba y, en virtud de esta declaración, se condena a la demandada al pago de indemnizaciones, compensaciones, cotizaciones de seguridad social y a la sanción de nulidad del despido a favor del actor; mismas que a la fecha aún se encuentran impagas.

Expone que, sin embargo, la sentenciadora acogió la excepción de prescripción del feriado legal que fue invocada por la demandada, reduciendo el periodo de indemnización demandado de 43 días (\$1.290.000) a solo 21 días (\$630.000); conforme aparece en el considerando décimo y en la parte resolutive de la sentencia recurrida.

Señala que no comparte este razonamiento, puesto que la correcta interpretación de la norma del artículo 510 del Código del



Trabajo es que el cómputo de prescripción ahí señalado comienza a correr desde que se verifica la separación efectiva del trabajador de su empleador.

Destaca que en el inciso 2º del artículo 510, se alude a la voz “*desde la fecha en que se hicieron exigibles*”, toda vez que esta es la que nos indica cuál es la regla por el cual se rige la norma de prescripción contenida en ella; y con esto en mente, se debe analizar lo establecido en los artículos 67 inciso 1º y 73 incisos 1º y 2º del Código del Trabajo, que transcribe.

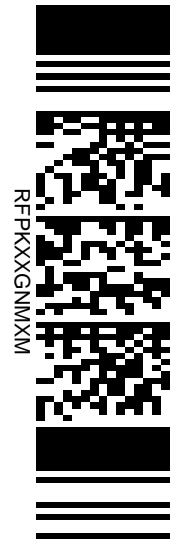
Explica que el inciso 2º del artículo 73 del Código del Trabajo es claro en señalar cuál es la circunstancia que autoriza la compensación en dinero por parte de la demandada: dejar de pertenecer, por cualquiera circunstancia, a la empresa. Posibilidad que además es totalmente excepcional, toda vez que la regla general es la contenida en el inciso 1º del mismo artículo, que señala que el feriado legal -en principio- no es compensable en dinero.

Afirma que la sentenciadora ha incurrido en una infracción de ley por interpretación errónea de la ley; ya que, de haber interpretado el artículo 510 en concordancia a lo establecido en los artículos 67 y 73, todos del Código del Trabajo, inconcuso sería haber resuelto que el plazo establecido en la primera norma señalada comienza a correr desde que -conforme al artículo 73 inciso 2º- se verifica la separación del trabajador de su empleador.

Hace presente que verificada la separación del trabajador desde el día 31 de diciembre de 2019, el cómputo del plazo para demandar la compensación en dinero del feriado legal devengado hasta dicha fecha se cumple recién el 31 de diciembre de 2021; verificándose por tanto el cobro de la compensación monetaria del feriado legal devengado antes de cumplido el plazo de prescripción señalado en el artículo 510 del Código del Trabajo. Ápice de esto, además, es el hecho de que la demandada no logró acreditar haber otorgado o compensado en dinero el feriado reclamado en el libelo pretensor.

Sostiene que admitir una interpretación diversa de la norma implica imponer a los trabajadores la obligación de demandar estas compensaciones mientras aún se encuentran prestando sus servicios a favor de su empleador; situación del todo contraria al espíritu mismo del derecho del trabajo y al principio protector del derecho laboral.

Cita jurisprudencia en apoyo de su posición y concluye que si el tribunal de instancia hubiera aplicado e interpretado correctamente el



artículo 510, en concordancia con los artículos 67 y 73 del Código del Trabajo, necesariamente hubiese tenido que rechazar la excepción de prescripción del feriado legal demandado; condenando por tanto a la Municipalidad de Huechuraba a compensar íntegramente el periodo laboral demandado por el trabajador en los términos señalados en el libelo pretensor, toda vez que no logró probar que el trabajador había hecho efectivos los feriados en el periodo servido, acogiendo así en todas sus partes la demanda.

Segundo: Como se sabe, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en el extremo que interesa, persigue verificar que la ley ha sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia. Por ende, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin que esté permitido agregar otros que no figuren asentados en el fallo, modificarlos o eliminarlos.

Tercero: Que en lo que interesa, la sentencia estableció en su motivo décimo, lo siguiente en torno al feriado y a la alegación de prescripción que hizo la demandada:

“Que en cuanto al feriado legal y proporcional reclamado, cabe precisar que la demanda fue notificada el día 28 de agosto del año 2020. Luego, de conformidad con el inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de 2 años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. En este escenario, corresponde acoger la excepción de prescripción respecto de aquellos derechos que se hicieron exigibles antes del día 28 de agosto de 2018. Así entonces y al no acreditar la demandada el hecho de haber otorgado o compensado en dinero el feriado reclamado, se accede parcialmente en este capítulo a la demanda y se condena al pago de 21 días de feriado legal y 8 días de feriado proporcional, sobre la base de la remuneración de \$900.000, ya establecida”.

Cuarto: Que en la demanda se solicitó los feriados legales y proporcionales devengados, en el periodo que va desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, correspondiente a 2 años, 3 meses y 30 días:

- Feriado legal: \$1.290.000.- pesos, equivalentes a 43 días. (2 años.)

- Feriado proporcional: \$240.000.- pesos, equivalentes a 8 días. (3



meses y 30 días.)

Quinto: Que el tribunal acogió la prescripción pues consideró que debía contabilizarse el plazo de dos años desde que el feriado se hizo exigible y por ello estimó que el correspondiente al período anterior al 28 de agosto de 2018 estaba prescrito.

Sin embargo, al no haberse demostrado, como se señala en el motivo décimo que el feriado reclamado se haya otorgado, éste, por mandato del inciso primero del artículo 73 del Código del Trabajo no podía compensarse en dinero, salvo –indica el inciso segundo- que teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa y allí entonces surge el derecho a la compensación.

Conforme a lo anterior, y habiendo concluido la relación laboral el 31 de diciembre de 2019 -hecho asentado en el considerando 6°- y habiéndose notificado la demanda el 28 de agosto de 2020, la solicitud de condenar al pago del feriado legal y proporcional no se encontraba prescrita, incurriendo así la sentencia que se impugna en error de derecho por incorrecta aplicación del artículo 510 del Código Laboral que solo es posible revertir mediante la nulidad de la sentencia en esa parte, por lo que se acogerá el recurso de la demandante y se dictará la correspondiente sentencia de reemplazo que corrija la situación.

II.- En cuanto al recurso de nulidad de la parte demandada:

A.- De la causal de nulidad principal:

Sexto: Que, como primera causal, la demandada invoca la del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, en relación al artículo 420 letra a) y el artículo 1° del mismo cuerpo legal y a los artículos 3 y 4 de la Ley N° 18.883.

Fundamenta la causal señalando -previa transcripción de las normas citadas- que su parte opuso excepción de incompetencia absoluta, dejando el tribunal su resolución para la sentencia definitiva.

Sostiene que la sentencia recurrida ha sido dictada por juez incompetente conforme lo establece el artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, incurriendo en el vicio de nulidad alegado, ello por cuanto la sentencia ha sido dictada con omisión de los artículos 3 y 4 de la Ley N° 18.883 en relación a lo establecido en el artículo 1° del Código del Trabajo, y siendo estas últimas normas las que autorizan la contratación del demandante de la forma como lo fue, según los argumentos expresados en la excepción opuesta, norma que es absolutamente



vulnerada por la sentencia del tribunal *a quo*.

Explica que, en primer término, el inciso primero del artículo 3 de la Ley N° 18.883, señala expresamente que quedaran sujetas a las normas del Código del Trabajo las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios o sectores turísticos o de recreación, lo que imposibilita a la demandada a contratar personal sujeto a las normas del Código del Trabajo en forma permanente y fuera de los lugares que señala la norma citada; en consecuencia dicha norma en forma indirecta hace imposible que se aplique a los contratos a honorarios las normas establecidas en la contra excepción del inciso 3 del artículo 1° del Código del Trabajo, puesto que no permite la contratación bajo las normas de dicho cuerpo legal si no en los casos que expresamente señala la citada norma, donde rige el principio de legalidad de la administración.

Señala que, en segundo término, al no ser aplicado el inciso final del artículo 4 de la Ley N° 18.883, esto es, que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato; sin estar afectas al estatuto municipal y menos a la normativa laboral que solo excepcionalmente se aplica en el ámbito en la administración pública, conforme se señala en el artículo 3 del mismo cuerpo legal, incurre en la infracción alegada ya sin duda alguna ha provocado una errada calificación jurídica del contrato con el demandante para rechazar la excepción de incompetencia opuesta por su parte, ya que era imposible que la actora se encontrara en la situación prevista en el inciso 3 del artículo 1° del Código del Trabajo, infringiendo con ellos las normas señaladas.

Afirma que, por otro lado, el artículo 1° del Código del Trabajo, señala que sustrae del ámbito de aplicación de dicha normativa y de sus leyes complementarias a los funcionarios de la administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, por cuanto estos por ley están sometidos a un estatuto especial, y al no ser el demandante un funcionario público, en el caso de marras se rige por el contrato de prestación de servicios a honorarios, aún más cuando la contra excepción señalada en la misma norma no es asimismo aplicable al caso sub - lite, por cuanto iría en contra de lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 18.883, que no permite más que en los casos que dicha norma señala la contratación bajo las normas del Código del Trabajo, no pudiendo el fallo recurrido encuadrar la situación del demandante en una supuesta relación laboral propia del contrato definido en el artículo 7 del



Código del Trabajo, ni hacer efectivo a su respecto derechos o beneficios contemplados en ese cuerpo legal, porque sus normas no rigen a las Municipalidades ni a otros organismos de la administración del Estado y menos a los contratos celebrados bajo la normativa del artículo 4 de la Ley N° 18.883.

Añade que, en la especie el estatuto especial es el contrato de prestación de servicios a honorarios en el cual incide en forma indirecta la prohibición señalada en el artículo 3 de la Ley N° 18.883, esto es, que no se puede contratar –por ende, no aplicable– bajo las normas del Código del Trabajo a no ser en los casos que previene dicha norma, por lo tanto, no es aplicable las normas laborales a la regulación de los contratos a honorarios del demandante.

Explica que el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, señala en forma precisa que el juez laboral solo tiene competencia para conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, mas no es el caso de autos, puesto que: a) lo que hace el Juez es prescindir de lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que faculta a la demandada para acordar la contratación de servicios a honorarios “para cometidos específicos, conforme a las normas generales”, ignorando a su vez el mandato establecido en el último inciso del artículo 4 de la misma ley, que señala que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca su respectivo contrato, sin estar afectas al estatuto administrativo y menos a la normativa laboral común que no se aplica en el ámbito de la Administración Pública; b) así, el sentenciador incurre en el vicio alegado por cuanto vulnera lo establecido en el artículo 4 antes señalado, ya que no considera que la Administración del Estado está explícitamente facultada por dicha norma para contratar servicios a honorarios para cometidos específicos.

Menciona que la sentencia recurrida al ser dictada por juez incompetente, vulnera aún más lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, al señalar que en virtud del principio de la primacía de la realidad se confirma que la relación contractual entre las partes fue de naturaleza laboral y no civil, puesto que dicho principio solo sería lícito aplicarlo a una relación laboral de derecho común, pues en ella, por la irrenunciabilidad de los derechos, las modalidades de obligaciones y beneficios practicadas en la vida diaria, configuran el contrato de trabajo y añade que, no obstante, este principio en el área laboral de la administración pública, es ajeno y absolutamente inaplicable, en virtud



de la clara y específica normativa de legalidad que rige la acción del Estado, y en este caso de la Municipalidades que se enuncian en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, según la cual los órganos del Estado no tienen más atribuciones que las conferidas expresamente por las leyes, principio que recogen asimismo los artículo 2º y 15 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado en relación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695 y al Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, Ley N° 18.883, en sus artículos ya señalados, que impiden a la demandada contratar personal sujeto al Código del Trabajo, fuera de los casos específicamente señalados por la ley.

Más adelante sostiene que al rechazar la excepción de incompetencia y dictar luego la sentencia recurrida, esta fue dictada por un juez incompetente, incurriendo en la causal invocada, puesto que no estamos en presencia de contratos regulados por el Código del Trabajo, sino que de prestaciones de servicios a honorarios como arrendamiento de servicios por parte del demandante a su representada que se reguló a través de una serie de decretos alcaldicios y contratos, y que en conformidad a las normas del Código Civil y de los principios generales del derecho deben las partes sujetarse, más aun cuando la propia Ley N° 18.883, en su artículo 3, limita la aplicación de las normas del Código del Trabajo, siendo contraria en consecuencia su aplicación a las normas del estatuto que rige dichos contratos.

Concluye que de no existir esta infracción legal, es decir de haber dado a lugar a la excepción de incompetencia, el tribunal se habría declarado incompetente para el conocimiento de estos asuntos, no pudiendo en consecuencia prosperar la demanda por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones.

Séptimo: Que, el artículo 478 del Código Laboral señala, en lo que interesa, que: *“El recurso de nulidad procederá, además: a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;”*

Sobre el particular, la recurrente plantea la causal fundándose en la circunstancia que los servicios prestados por el demandante para la Municipalidad no son del ámbito de conocimiento de un juzgado laboral, pues la única forma que tenía el Municipio de contratarlo era a honorarios.



Octavo: Que, sin embargo parte de dicho análisis se arraiga en la premisa -descartada por el tribunal de base- que don Esteban Felipe Padilla Briones fue contratado para un cometido específico o una labor accidental en la Municipalidad de Huechuraba y al alero del inciso segundo del artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En efecto es útil recordar que en los considerandos quinto y sexto de la sentencia se establecieron las labores que realizaba el demandante y luego estas fueron catalogadas bajo subordinación y dependencia, expresándose que la forma, oportunidad y cantidad de asesorías practicadas por el señor Padilla lo fueron bajo las órdenes del encargado del CIE y más aún el actor estaba obligado a registrar e informar permanentemente su trabajo y estaba sometido a la aprobación y control de la Municipalidad en calidad de empleadora.

Más adelante el fallo sostiene en relación a las labores del demandante que *“...lo servicios prestados por el actor desde el año 2017 a 2019 fueron para consecución de un objetivo del gobierno municipal –el desarrollo de las micro empresas en la comuna– circunstancia que obsta a lo accidental y esporádico u ocasional de las tareas a que se refiere el artículo 4 de ley 18.883. En este mismo sentido, la amplitud y generalidad de labores tales como realizar acciones para la formación y capacitación, trabajar con pequeños empresarios para mejorar su gestión y apoyar a pequeños empresarios para mejorar su gestión, implican el desarrollo de procesos y metodologías, cuya naturaleza también obsta a la especificidad invocada por la demandada e impide deducir o inferir la existencia de un cometido específico asignado al actor”*.

Noveno: Que así la cuestión controvertida en orden a si el demandante fue o no contratado para un cometido específico fue desechada por el juez *a quo* de acuerdo al mérito del análisis probatorio que realizó, concluyendo finalmente que, en lo que realidad existió fue una relación laboral amparada por las normas del Código del ramo y, por ende, bajo la competencia de la judicatura laboral.

Décimo: Que por lo mismo, es posible establecer que la discusión corresponde más bien a un asunto de fondo que a un tema de competencia, de manera que, habiéndose establecido la existencia de una relación laboral, no queda sino desechar la causal de incompetencia levantada por la parte demandada.

B.- De la primera causal de nulidad subsidiaria:



Undécimo: Que, en subsidio, la demandada invoca la causal prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en relación con el artículo 456 del mismo cuerpo legal.

Sostiene que la sentencia pondera en forma errónea y fuera de las máximas de la experiencia y de la lógica, la prueba documental y testimonial acompañadas por las partes, con los cuales sin duda alguna se determina y se llega a la conclusión que no se trató de una relación laboral sino una relación de prestación de servicios a honorarios, que jamás pudo mutar en una relación de carácter laboral.

Explica que la sentencia de autos en su considerando cuarto, al realizar el análisis de la prueba estableciendo los hechos de la causa para luego determinar consecuentemente a partir de los considerandos quinto, sexto, séptimo y octavo, la existencia de una relación laboral actúa en contra de la propia prueba analizada, pues en los considerandos señalados, basa su decisión de considerar la existencia de una relación laboral, señalando al efecto que ésta se desarrolló con elementos propios de una relación de naturaleza laboral, al presentarse en ella características de un vínculo de subordinación y dependencia otorgándose derechos correspondientes a aquella como existencia de órdenes e instrucciones de una jefatura, el feriado, existencia de una jornada, existencia de una remuneración y que se trataba de laborales más bien habituales y continuas que rebasan la normativa del artículo 4 de la Ley N° 18.883, lo que es absolutamente errado y contrario a la prueba rendida en autos.

Afirma que de la prueba aportada por ambas partes, no es posible establecer la existencia de una relación laboral, ya que los documentos citados fueron apreciados con el vicio reclamado por lo siguiente:

a) De los contratos acompañados, de las boletas de honorarios, informes, mensuales, bimensuales, trimestrales y finales, analizados en el considerando cuarto, solo se puede concluir que siempre se trató de una contratación a honorarios regida por el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que jamás pudo devenir en una relación bajo subordinación y dependencia regida por el Código del Trabajo.

b) De los contratos acompañados y decretos en autos solo se puede concluir que el demandante se desempeñó a través de un vínculo contractual regido por el artículo 4° de la Ley N° 18.883, esto es, con un contrato de prestación de servicios, con cometidos específicos y



claramente determinados bajo el alero de los programas denominados “Fortalecimiento y Sustentabilidad de la Micro y Pequeña empresa” para el año 2017, programa de “Equipo de prestadores de servicios de manera ocasional y/o transitoria para la gestión Social Municipal de la Dideco” para el año 2018 y Programa “fortalecimiento y Sustentabilidad de la Micro y pequeña empresa de Huechuraba” programas todos que (y en especial el último programa al cual estuvo adscrito) que establecían los objetivos generales y particulares, periodo de ejecución determinados en el tiempo (no más allá de un año) y el financiamiento necesario para la ejecución de dichos programas, y con lineamientos claros y definidos por dicho programa para ser ejecutados por esa demandada.

c) Así, la sentencia de autos, en su considerando cuarto, al señalar como hechos establecidos, infringe las normas de apreciación de la prueba conforma a las reglas de la sana critica, en especial las máximas de la experiencia, y razones lógicas.

Precisa que el considerado cuarto, establece como hecho de la causa, que los cometidos ejecutados por la actora, se desarrollaban con cumplimiento de horarios y supervigilados por jefatura, quien impartía ordenes e instrucciones, tal conclusión la realiza en dicho considerando, sin considerar los informes de cumplimiento de cometidos firmados de puño y letra por el demandante, y de estos informes más los decretos y contratos acompañados por ambas partes, es imposible que la sentenciadora, conforme a la experiencia adquirida y a las razones lógicas, pueda concluir que solo con dicho razonamiento exista horario y supervigilancia.

Añade que incurre en dicho vicio también, puesto que señala que de la prueba documental, especialmente de los contratos y de la declaración de testigos, aparece que cumplía una jornada de trabajo en el Departamento Laboral, lo que se aleja de lo que establecen las pruebas señaladas, ya que si la sentenciadora hubiera aplicado correctamente las máximas de la experiencia, aplicando los conocimientos adquiridos, fácilmente habría podido advertir de toda la prueba documental acompañada por su parte, que estos cometidos igualmente y primariamente se debían cumplir dentro del funcionamiento normal de la Municipalidad puesto que era el marco legal de esos objetivos, no obstante igualmente dichos cometidos se desarrollaron fuera de este funcionamiento normal, ya que el considerando cuarto en su letra b) reconoce que estas funciones desempeñadas las realizaba



también en días sábado y domingo, por lo que la prueba en este punto fue analizada con la infracción manifiesta señalada.

Relata que la prueba testimonial citada en el fallo recurrido, tampoco aporta la convicción suficiente al sentenciador para concluir lo señalado en el considerando cuarto, por cuanto el supuesto carácter laboral de la función de la demandante, con jefaturas no es tal, en efecto el artículo 4 de la Ley N° 18.883 permite a la demandada contratar a personas conforme a las reglas generales, para la ejecución de cometidos específicos.

Afirma que en virtud del principio de la primacía de la realidad, basados en los informes de cumplimiento, boletas, contratos y decretos e incluso la prueba testimonial de autos, aparece que el actor se desempeñó bajo la figura de contrato de honorarios con cometidos específicos claros y establecidos y no genéricos, por lo que en concreto no estamos fuera de la normativa del artículo 4 de la Ley N° 18.883.

Indica que el razonamiento anterior demuestra en forma clara la manifiesta infracción a las normas de la apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica, agregando que la errada aplicación de las máximas de experiencia y la falta de razonamientos lógicos es evidente y manifiesta, por cuanto no hace una análisis de los medios de prueba instrumental, testimonial y otros de la forma como ha sido enunciada, llegando a una errada conclusión en cuanto determina la existencia de una supuesta relación laboral con la demandante.

Concluye que de no existir el vicio denunciado, la demanda habría sido rechazada en forma íntegra, ya que no existen medios probatorios para dar por acreditada la existencia de una relación laboral para con el demandante regida por el Código del Trabajo conforme lo dispone el artículo 7 del mismo cuerpo legal.

Duodécimo: Que, el artículo 478 del Código del Trabajo dispone en su letra b) que el recurso de nulidad procederá además cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

A su vez, el artículo 456 del mismo Código establece la obligación para el tribunal de apreciar la prueba conforme a dichas reglas y añade que *“Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y*



conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”.

Conforme a lo dicho corresponde examinar si la sentencia impugnada cumplió con el precepto antes indicado o, si por el contrario, lo desobedeció, en especial, si como dice el impugnante, atentó a los principios de la lógica y máximas de la experiencia.

Décimo tercero: Que, para que prospere la causal alegada por la recurrente, es menester que la infracción a las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista. Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Décimo cuarto: Que de la lectura del recurso es ostensible que no cumple con las exigencias antes anotadas, pues fuera de repetir que el examen de la prueba no fue lógico no desarrolla en concreto por qué hace tal reproche, más aún si el sentenciador explica fundadamente cómo el desarrollo de las labores del demandante, el contexto en que las ejecutaba, sus fines, reportes y subordinación eran propios de una relación laboral. De otra parte tampoco el recurso refiere qué máxima de la experiencia es la que considera que se transgredió, dejando ver más bien que en el fondo el impugnante simplemente está en desacuerdo con lo resuelto repitiendo sus argumentos de defensa y limitándose a aseverar atentados a la sana crítica sin desarrollarlos y menos demostrarlo.

En suma, la pretensión del recurrente es una invitación a realizar una nueva y directa valoración de la prueba lo que no es posible dada la naturaleza del recurso, destinada solo a examinar si la apreciación cumplió con los parámetros que le impone el legislador laboral y lo cierto es, que no se divisa una falta de acatamiento a dicho deber, lo que conduce al rechazo de la presente causal.

C.- De la segunda causal de nulidad subsidiaria:

Décimo quinto: Que, en subsidio, la demandada alega la causal del artículo 477, segunda hipótesis del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, denunciando como transgredido el artículo 162 incisos 5° y 7°, del Código del Trabajo, en relación al artículo 19 del Código Civil.

Expone, en síntesis, que la sentencia recurrida condenó a su parte al pago de las remuneraciones por la denominada figura nulidad del



despido, contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, por el fundamento señalado en el motivo noveno, que transcribe.

Afirma que la sentencia de autos incurre en la infracción de ley de los artículos 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo en relación al artículo 19 del Código Civil, negando con ello también la aplicación de la uniforme y categórica jurisprudencia emitida por la Excma. Corte Suprema a través de sendos fallos recaídos en recursos de unificación de jurisprudencial (que cita) en los cuales ha sostenido en forma constante y fundada el rechazo la aplicación de la figura de la nulidad del despido cuando se trata de vinculaciones contractuales a honorarios entre una persona natural y un órgano del Estado, en este caso una municipalidad, de manera tal que el criterio sostenido en la sentencia recurrida es por cierto errado y equivoco, ya que al realizar la interpretación de la norma en comento como lo plantea, evidentemente constituye una infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo que hace procedente que la sentencia sea declarada nula en este punto.

Sostiene que no procede la sanción de la nulidad del despido establecida en el inciso 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, cuando es en la sentencia definitiva donde se declara la existencia de la relación laboral.

Relata que, en primer término no procede dicha sanción, puesto que esta ha sido prevista o establecida para el empleador que ha efectuado la retención de las remuneraciones del trabajador y no entera los fondos en el organismo correspondiente, o sea no ha cumplido con el rol de agente intermediario distrayendo los dineros que no le pertenecen a otros fines o finalidades distintas para las cuales fueron concebidas, lo que no acontece en el caso sub - lite, puesto que dicha retención ni distracción nunca se produjo, es decir no existió fraude alguno.

Indica que, en segundo término, es la sentencia la que viene a constituir los derechos de la demandante como sujetos bajo la normativa del Código del Trabajo, desde la época de su dictación y desde que quede ejecutoriada, no antes, puesto que sus derechos bajo dicha normativa se han perfeccionado solo a partir de esta época y no antes, de manera que se infringe la norma señala por cuanto la demandada no se encontraba en mora de pago en las cotizaciones previsionales a la fecha del termino de los servicios, y porque para la demandada siempre existió un arrendamiento de servicios para con la demandante, hecho que solo cambió a partir de la dictación de la sentencia recurrida y nunca



antes, todo sumado al hecho que la demandada retuvo los respectivos montos por impuestos, los cuales fueron devueltos por el Fisco a la demandante en cada año tributario, lo que de sostener la tesis de la sentencia recurrida, significaría que ese ente público sujeto a la normativa administrativa de rigor, estaría pagando dicha sumas dos veces, lo que por cierto refuerza la tesis de la infracción de ley en este punto.

Agrega que el argumento anterior se ve fuertemente reforzado con los recientes fallos de Unificación de jurisprudencia dictados por la Excma. Corte Suprema, que, si bien no disponen el mismo fundamento factico para rechazar la nulidad del despido en este punto, consideran igualmente que no es procedente su aplicabilidad en el caso sub lite.

Concluye que de no existir esta infracción legal, no se habría condenado a su parte a la nulidad del despido, esto es, al pago las remuneraciones que van desde el despido hasta la convalidación del mismo, es decir habría interpretado en forma correcta la aplicación de la citada norma, como se ha planteado en el presente recurso.

Décimo sexto: Que sobre el particular, lo que el recurrente cuestiona es la aplicación de la denominada sanción de nulidad del despido, pues habiéndose declarado en este juicio la existencia de relación laboral y constatándose el no pago de las respectivas cotizaciones previsionales, el tribunal de base aplicó lo dispuesto en los incisos 5° a 7° del artículo 162 del Código del Trabajo.

Al respecto, tal como ha señalado reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (rol 42.863-2020) “... *tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.*”

Enseguida el Excelentísimo Tribunal añade “*Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento*



judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido”.

Así acierta la Municipalidad de Huechuraba cuando acusa una infracción de ley de la sentencia al aplicarle los efectos que el artículo 162 del Código Laboral prevé ante el no pago de las cotizaciones previsionales, por lo que en este aspecto, es cierto que el Municipio actuó bajo un manto de legalidad que solo a consecuencia de esta sentencia logró determinarse y asentar la verdadera naturaleza de los servicios que ejecutaba el demandante, de manera que no corresponde aplicar la denominada sanción de nulidad del despido, y es por eso que se acogerá en esta parte el recurso de nulidad de la demandada.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Se acoge el recurso de nulidad deducido por la demandante en contra de la sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT O-2439-2020, sentencia que, en consecuencia, **es nula en la parte** que acoge la excepción de prescripción respecto de parte del feriado solicitado, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación.

II.- Se acoge el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la aludida sentencia y en consecuencia, se anula la sentencia impugnada **en la parte** que aplicó a la Municipalidad los efectos de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Se rechaza en lo demás el recurso de nulidad de la parte demandada.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Laboral-Cobranza N° 2901-2021.

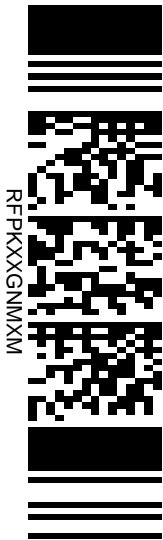
Pronunciada por la **Duodécima** Sala, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa e integrada además,



por la Ministra señora Mireya López Miranda y la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus.

MIREYA EUGENIA LÓPEZ MIRANDA
MINISTRO
Fecha: 25/07/2022 11:08:49

LIDIA VIRGINIA POZA MATUS
MINISTRO(S)
Fecha: 25/07/2022 12:44:32



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M. y Ministra Suplente Lidia Poza M. Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia anulada con excepción del considerando noveno que se elimina, salvo su último párrafo.

Se elimina el considerando décimo.

De la sentencia de nulidad que precede se reproducen sus fundamentos cuarto, quinto y décimo sexto.

Y se tiene además presente:

1º) Que en cuanto a la petición de pago del feriado legal y proporcional, atendido que no consta que el demandante haya hecho uso del feriado correspondiente el periodo que va desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, correspondiente a 2 años, 3 meses y 30 días, debe accederse a su pago por los montos indicados en la demanda, esto es, \$1.290.000 por dos años de feriado legal (43 días) y \$240.000 por 3 meses y 30 días (8 días) de feriado proporcional.

En efecto, no es posible acoger la excepción de prescripción conforme a los argumentos dados en la sentencia de nulidad que se ha reproducido.

2º) Que dado lo señalado en la sentencia de nulidad que antecede, en su motivo reproducido resulta procedente desestimar la demanda de nulidad de despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en las normas legales ya citadas de la Ley N°18.883 y artículos 1, 2, 7, 8, 9, 73, 162, 168 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo, se resuelve que:

I. Se rechaza la excepción de incompetencia absoluta del tribunal.

II. Se rechaza la excepción de prescripción.

III. Se acoge parcialmente la demanda y se declara:

a) Que entre las partes existió una relación de naturaleza laboral entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, con una remuneración mensual de \$900.000.

b) Que el despido del demandante es indebido por lo que se condena a la Municipalidad de Huechuraba al pago de las siguientes prestaciones:



i. \$900.000 (novecientos mil pesos) como indemnización sustitutiva del aviso previo.

ii. 1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos) como indemnización por años de servicios.

iii. \$900.000 (novecientos mil pesos) por concepto del incremento del 50% establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo.

iv. Cotizaciones previsionales, de salud y por cesantía impagas de todo el período trabajado de acuerdo con las remuneraciones indicadas en el considerando noveno.

v. \$1.290.000 por concepto de 2 años de feriado legal.

vi. \$240.000 por concepto de 8 días de feriado proporcional correspondiente a tres meses y treinta días.

c) Que, las sumas ordenadas pagar se incrementarán en la forma dispuesta en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

d) Que se rechaza la demanda de nulidad del despido.

e) Que no se condena en costas a la demandada.

En su oportunidad, ofíciase a las instituciones de seguridad social.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol laboral-cobranza N° 2901-2021(sentencia de reemplazo)

Pronunciada por la **Duodécima** Sala, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa e integrada además, por la Ministra señora Mireya López Miranda y la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus.

MIREYA EUGENIA LÓPEZ MIRANDA
MINISTRO
Fecha: 25/07/2022 11:08:51

LIDIA VIRGINIA POZA MATUS
MINISTRO(S)
Fecha: 25/07/2022 12:44:39



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M. y Ministra Suplente Lidia Poza M. Santiago, veinticinco de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

